

## Argentina 1973-76: la génesis de una nueva crisis política

OSCAR LANDI

### 1. *Las relaciones de fuerzas políticas y la escena electoral*

#### 1.a. *El clivaje electoral principal*

El clivaje principal que agrupó las opciones electorales del 11 de marzo de 1973 fue el pronunciamiento respecto al gobierno de la Revolución argentina instaurado en 1966. Un sencillo y difundido cálculo ubicó al 80% de los votantes en alternativas que contenían distintos tipos y grados de rechazo de la misma.<sup>1</sup>

Si recortamos el centro de la escena electoral se puede decir, sin exagerados riesgos de error, que el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) fue votado por casi la totalidad de la clase obrera urbana, importantes sectores de ingresos medios (asalariados, terciarios, profesionales, burguesía pequeña, urbana y rural, etcétera), sectores medianos de burguesía "nacional", principalmente en los polos urbanos más desarrollados y diversos tipos de trabajadores independientes urbanos y

<sup>1</sup> Se ubicaron en este campo, el Frente Justicialista de Liberación (Partidos Justicialista, Popular Cristiano, Conservador Popular y una rama del Socialista y el Movimiento de Integración y desarrollo) con el 49,59% de los votos; la Unión Cívica Radical con el 21,30%, la Alianza Popular Revolucionaria (partidos Intransigentes, Revolucionario Cristiano y Comunista) con el 7,43%, y además diversas fracciones de izquierda contabilizaron el 1% de los votos.

Dos indicadores directos hacen aceptable este agrupamiento: a) el acuerdo programático de 1972 de los partidos Justicialista, Radical, Conservador Popular, Socialista Argentino, etc. en el marco de la llamada Hora del Pueblo, y b) la canalización de votos en las elecciones de septiembre de 1973 a favor de la candidatura del general Perón, particularmente la definición en ese sentido de la Alianza Popular Revolucionaria.

minifundistas del interior. A su vez, la Unión Cívica Radical encontró su base principal en los sectores medios urbanos, en sectores de la burguesía mediana, particularmente agraria y, en ciertas regiones sectores menores de burguesía alta.<sup>2</sup>

Desde el punto de vista de su configuración social podemos desprender de estos datos dos rasgos básicos: la contención de la fuerza productiva principal, los asalariados industriales, y de la trama de relaciones de producción privadas "mercadointernista" características de los movimientos nacionalistas en América Latina.

Si buscamos un ángulo de análisis más dinámico cabe especificar que eran sectores cuya ubicación objetiva respecto del funcionamiento de la estructura productiva y del Estado estaba marcada por los efectos del intento a medio camino de desarrollo capitalista que encaró la R.A.; la que tuvo, además, agudizadas coyunturalmente sus características de exclusión económica en el tramo recesivo del ciclo económico argentino, en el que se abrió objetivamente un más amplio margen objetivo para la convergencia policlasista afectada por esta política. Desde 1971 se produjeron síntomas, aunque no muy agudos, de entrada en esos tramos en los que la convergencia defensiva, que luego ocupara el centro de la escena electoral ofensivamente, se fue configurando con evidente éxito en el bloqueo y desestabilización de la política oficial, así como en la fractura de los vasos comunicantes —ya de por sí afectados por las medidas económicas de la primera etapa de la R.A.— entre los circuitos de acumulación urbano y rural de las fracciones propietarias predominantes. Con la consiguiente vuelta pendular hacia el bloque —llamémosle— populista de ciertos sectores de la burguesía argentina mediana y también alta, la menos asociada al capital internacional.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Estos grandes trazos contienen un importante margen de imprecisión en cuanto a la discriminación de fracciones de clase en la estructura electoral, con todo, a los efectos de nuestro foco de análisis los hallamos aceptables. Para un análisis específico véase el trabajo de Manuel Mora y Araujo: "La estructura social del peronismo: un análisis electoral interprovincial", *Revista Desarrollo Económico* No. 56, enero-marzo de 1975. El trabajo tiene como hipótesis central la afirmación de que el peronismo "... es un movimiento principalmente obrero en las zonas centrales del país —correspondiendo bastante bien a la imagen de un partido obrero en cualquier sociedad industrial, con fuertes conexiones con los sindicatos— y principalmente movilizador y policlasista en las zonas periféricas —correspondiendo a un partido populista movilizador en sociedades dependientes y poco industrializadas", pág. 701. Véase también la discusión iniciada por el artículo de Jorge Raúl Jorrot: "Algunas notas sobre la correlación negativa entre voto al FREJULI y clase obrera", en *Desarrollo Económico* No 59, octubre-diciembre 1975.

<sup>3</sup> El mencionado movimiento pendular de ciertas capas altas de la burguesía argentina se refiere a su recurrente oscilación entre la alianza con la gran burguesía pampeana en la fase recesiva del ciclo económico y el acople al bloque populista cuando los efectos de las medidas estabilizadoras —particularmente el aumento de la tasa de ganancia y el saneamiento de la balanza de pagos y las presiones de

De modo que, principalmente desde 1969, se fueron desencadenando demandas del sector asalariado, reclamos sectoriales del capital mediano y pequeño de la burguesía agraria y diversas manifestaciones de rechazo al autoritarismo político que se fue extendiendo hacia sectores sociales cada vez más altos. Desde el punto de vista de su combinación en el espacio y el tiempo, se dieron diversas explosivas manifestaciones regionales de protesta social, localizadas en zonas de desarrollo económico desigual, en las que cada uno aportó según sus características propias al mismo proceso, desde la clase obrera con su estratégica capacidad paralizante del dinamismo económico (secuencia de paros, trabajo a reglamento, etcétera) hasta la legitimación ideológica y organizativa que les fue dando la participación y/o la obligada aceptación de la dirección sindical y de los partidos mayoritarios. Sin embargo, y este es el terreno en que queremos situarnos, esta inmensa movilización opositora, predominantemente social, no era prepolítica a secas ni un efecto directo de la secuencia expansión-recesión del ciclo económico.

### 1.b. *La política en la constitución de los bloques electorales.*

Los frustrados intentos de apertura del poder gubernamental a sectores del capital nacional que se ensayaron tanto a través del régimen político originario de la R.A. (general Livingston) como mediante su alteración trasladando el control político de las Fuerzas Armadas al sistema representativo de partidos (general Lanusse) encontraron —sobre la base de determinada situación estructural y coyuntura económica— el obstáculo inmediato principal en la contextura política de la sociedad civil, particularmente en la presencia del populismo consolidado históricamente como heterogéneo movimiento político nacionalista.

sectores menores de la burguesía y el sector asalariado les hacen posible y ventajoso en el corto plazo, la reactivación expansiva del ciclo. En este caso, se venía de un intento que no estuvo comandado por el sector pampeano sino por la alta burguesía industrial —representada por el Ministro Krieger Vasena— y que trató de subordinarlo a sus intereses. El proyecto suscitó, en un primer momento, la expectativa positiva de capas menores de la burguesía argentina, las que luego confluyeron con las más altas en su oscilación hacia el bloque populista, aunque se dispersaron en diferentes posiciones, desde el apoyo activo al nuevo gobierno a través de la Confederación General Económica hasta un calculado dejar hacer de las capas más altas. En el trabajo de Guillermo O'Donnell: *Estudio y alianzas en la Argentina 1956-1976* (CEDES, Bs. As.), se puede encontrar un análisis fundamental de la dinámica económico-política del mencionado penduleo. Para una exposición de un modelo teórico pertinente al análisis del ciclo económico argentino, véase el trabajo de Adolfo Canitrot: "La experiencia populista de redistribución de ingresos", en *Desarrollo Económico* n° 59.

La movilización social y particularmente la presencia reivindicativa del sector asalariado puso, a su vez, un límite objetivo a la capacidad de maniobra de las cúpulas políticas y sindicales en la negociación con el gobierno, sobre todo en tanto la apertura no obedeció a una decisión controlada y previsoras del Estado, sino al asedio de las fuerzas sociales y políticas opositoras. Sin embargo, el análisis no puede dejar de considerar el hecho que la clase obrera ya venía constituida desde 1945 políticamente en la identidad peronista e inscripta organizativamente en el sindicalismo, y a pesar de que sus ejes de movilización giraron alrededor de reivindicaciones sociales y antiautoritarias en general, en lo fundamental no llegó a redefinirse en el plano político fuera del espectro de los partidos de masas que a su turno venían dominando la escena electoral desde la misma instauración del sufragio a principios de siglo. Y que, por otra parte, frente a los intentos de desarrollo capitalista dependiente de 1958 y 1966 incorporaron ciertos cambios en sus contenidos programáticos y en sus tácticas políticas que se evidenciaron aptos para su confluencia política y para absorber —aunque conflictivamente— en el plano de la política a la protesta social.

En efecto, la secuencia de la movilización social encontró su punto de arranque fundamental en los grandes hechos regionales de 1969, particularmente el Cordobazo,<sup>4</sup> hacia 1971 y 1972 se prolongó principalmente en conflictos de plantas industriales y, luego de manera combinada con la movilización electoral se produjo la incorporación creciente de diversos sectores medios, particularmente empleados. En este itinerario uno de los rasgos políticos del proceso, el desarrollo de corrientes sindicales “clasis-tas” y de segmentos radicalizados de los grandes partidos, en particular el peronista, tuvo un rápido avance pero no en términos de conquista de la hegemonía política sino de un crecimiento aún molecular.

De modo que fue la consigna de la vuelta de Perón la que funcionó como el principal articulante de la movilización al plano político. Como iremos analizando, ello supuso, al mismo tiempo, el reencauce institucional de la movilización social y la constitución desde la política del punto de fractura inmediato que impidió la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en los términos planteados por el gobierno .

En efecto, la orientación política de la R.A. bajo el liderazgo del general Lanusse consistió en un esquema que, sobre la base de la distinción entre “enemigos” y “opositores”, se propuso establecer reglas de juego aptas para la absorción política de los representantes políticos y sindicales de los sectores sociales subalternos en estado de movilización y que se ins-

<sup>4</sup> Véase Francisco Delich: “Crisis y protesta social”, editorial Siglo XXI.

cribían en el campo de la oposición.<sup>5</sup> Las bases de la llamada “salida política” a las graves dificultades que fue acumulando el proyecto que en 1966 se propuso montar un nuevo país sobre la base de la conexión de los sectores industriales predominantes con los centros de decisión estatales eran la eventual posibilidad del gobierno de controlar la escena electoral y de alterar su proyecto económico dentro de los límites del acompañamiento de los sectores de la burguesía argentina que “volvían” pendularmente al bloque populista y los márgenes de autonomía que podían ofrecer las modificaciones que tenían lugar en el mercado mundial.

La operación comenzó tratando que el general Lanusse fuera el candidato presidencial de la oposición, siguió con los intentos de fragmentarla para conservar funciones de arbitraje y de control sobre ella, pero finalmente el reiterado fracaso hizo que el gobierno tuviese que “ir” a las elecciones.

El 20% de votos obtenido por las fórmulas electorales que estaban de manera directa o indirecta emparentadas con el gobierno<sup>6</sup> expresó, que desde la sociedad civil no había continuidad posible de los sectores económicos predominantes, las diversas fracciones más concentradas e internacionalizadas del capital urbano y rural, pusieron de manifiesto nuevamente la crisis de hegemonía que arrastraban desde hacía décadas en el plano político. Su incapacidad para vincular a grandes sectores a la escena política a través del sufragio se unió a que desde hacía años estaban orientados a la gestión de otras formas más orgánicas de vinculación con el Estado y no a la construcción de una fuerza electoral. Por otra parte, el ya señalado penduleo de sectores importantes de la burguesía tuvo sus efectos en otras capas altas de la misma que fueron políticamente neutralizadas y se replegaron corporativamente.

Situado el análisis en este terreno, creemos que permite intentar ahora la consideración de la correlación entre la distribución de los porcentajes electorales y la distribución de fuerzas en las diversas instancias que conformaron la trama global del poder.

<sup>5</sup> Para el análisis general del periodo de la Revolución argentina y en particular del proyecto lanusista en términos de operación “transformista”, véase el trabajo de Juan Carlos Pontantiero; “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, revista *Pasado y Presente* No. 1 (nueva serie), abril-junio de 1973. Para un análisis teórico-comparativo, véase Guillermo O'Donnell: *Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio en el Estado burocrático-autoritario*, edición del CEDES, Bs.As.

<sup>6</sup> Ezequiel Martínez, el candidato presidencial individualizado por contar con el apoyo del Gral. Lanusse obtuvo el 2,9% de los votos, la Nueva Fuerza orientada por Álvaro Alsogaray, conocido por anteriores actuaciones públicas y en sectores más politizados por su adhesión a la escuela monetarista de Chicago, obtuvo el 1,96% de los votos. El caudal más significativo —el 14,9%— los obtuvo el candidato aparentemente más distante del gobierno, Francisco Manrique.

1.c. *La escena electoral y la trama del poder*

La convergencia triunfante se hallaba en una situación de ofensiva en el terreno de la movilización social y en el electoral. Pero los porcentajes de votos de ambos bloques no era un reflejo fiel de sus respectivas disponibilidades de medios de poder en la sociedad en general.

En efecto, el magro 20% de votos asociados de una u otra forma al gobierno contenían —a grandes rasgos— desde un punto de vista más cualitativo:

- a) Lo fundamental de las fracciones de clases propietarias de los medios de producción principales, los que conformaban la columna vertebral del dinamismo económico del país;
- b) Una fuerte trama institucional político-ideológica en la sociedad civil, que si bien presentó la ausencia de una alternativa política con capacidad de suscitar el apoyo de grandes sectores, sin embargo se potenciaba en fuertes organizaciones corporativas empresarias, el control del grueso de los medios de difusión de mayor alcance y hasta en relaciones y afinidades con ciertas alas de los partidos mayoritarios;
- c) En la medida en que las Fuerzas Armadas habían sido las propulsores del proyecto de la R.A. quedaron en esas circunstancias —aunque no de manera cristalizada— enfrentadas al bloque triunfante.

Por decirlo de algún modo, la convergencia populista se hallaba entonces respecto al bloque dominante en una situación de ofensiva coyuntural en el terreno de la movilización social y en el de la definición electoral, pero desde el ángulo de su disponibilidad de medios de poder transitaba el pasaje de una situación históricamente defensiva hacia un desequilibrio de fuerzas. Este desajuste relativo insinuó virtualmente su punto de resolución en la eventual articulación entre el nuevo gobierno y la sociedad civil movilizada como productora de nuevas instancias de poder que comportaban la modificación de la trama profunda de las relaciones de fuerzas.

Por otra parte, el clima ideológico del momento —dominado por el voluntarismo político— contenían fuertes expectativas en esa dirección. Efectivamente, la imagen de las relaciones de fuerzas que tendió a prevalecer acentuaba aún más el significado del éxito electoral. El proceso presentó al gobierno de la R.A. actuando cada vez más “al día”, colocado rápidamente en una situación defensiva en la escena política y desembocando en un terreno en el cual los votos ofrecían a la percepción la posibilidad de encubrir en su homogeneidad los conflictivos intereses sociales que albergaban el bloque populista y, en todo caso, la expresión

de sus contenidos estaba a cargo en gran medida del activismo movilizado en la campaña electoral, en el que los sectores estudiantiles e intelectuales radicalizados tuvieron una fuerte presencia no sólo cuantitativa sino, sobre todo, en sus funciones de productores del discurso político. Esta imagen suponía la percepción de la lucha política como un espacio plano, donde la distribución de los votos y la distribución de las fuerzas se unificaban.

Pero si bien contenía una carga de distorsión de la realidad era punto de partida de cálculos políticos, de expectativas de acceso a resortes de poder, etcétera. Y, a la inversa, la percepción de amenaza por parte de los derrotados era marcadamente más intensa que el peligro real, lo que los empujaba a una retirada inorgánica, desordenada, aunque pronto encontrara un cauce táctico más efectivo para la defensa de sus intereses a mediano plazo.

## 2. *El mes y medio del gobierno de Cámpora*

### 2.a. *La alianza gobernante*

La presidencia de Héctor J. Cámpora puede ingresar holgadamente en la lista de ejemplos de procesos en los que el tiempo cronológico estuvo totalmente sobrepasado por el político. En efecto, en 50 días se produjeron no sólo una gran cantidad de hechos, sino fundamentalmente estuvo en juego el rumbo cualitativo del proceso que se inauguró con las elecciones de marzo. Es que el acceso de Cámpora a la presidencia y su alianza con la Juventud Peronista, con la que ocupara por momentos el centro de la escena política tuvo raíces en la vida social y política de grandes sectores populares pero, al mismo tiempo, recibió la ayuda, no tan orgánica a su desarrollo propio, del voto al general Perón como candidato presidencial. El gobierno de Cámpora no fue un cuerpo extraño en este proceso, pero no era expresivo de las relaciones de fuerzas que en el plano político tenía respecto a la cúpula de los partidos mayoritarios, la dirección sindical y la empresaria.

El núcleo de la estrategia lanusista a través del Gran Acuerdo Nacional era la succión del personal político de las fuerzas "opositoras". Pero Perón —independientemente de las deducciones que se puedan hacer a partir de su ideología, etcétera— no era succionable porque mantenía su notable presencia política sólo en tanto Líder de ese movimiento consolidado en décadas de lucha social y política y que consistía —a diferencia de otros movimientos latinoamericanos susceptibles de ser denomi-

nados genéricamente como populistas— a la clase obrera como su “columna vertebral”.

De ahí el enfrentamiento con matices personales y caudillescos entre Lanusse y Perón. El veto al líder del justicialismo era necesario en la medida en que aún estaba en juego la suerte del Gran Acuerdo Nacional. Por ello Lanusse forzó las cosas planteando primero a Perón el desafío de su regreso al país, cuya su eventual no aceptación allanaría en gran medida el camino de un acuerdo en los marcos de la propuesta del gobierno. Y luego, con el veto a la candidatura de Perón por lo menos se podía aspirar a la fragmentación del adversario. Entonces surgió la amenaza táctica de Perón de legitimar y estimular la acción de la Juventud peronista y de proponer a Cámpora —su delegado personal— como candidato presidencial. La alianza entre ambos elementos se constituyó en esas circunstancias, ella estaba en el cruce de la organicidad de la presencia de los sectores radicalizados en todo el proceso anterior y la maniobra táctica de Perón ante los intentos del gobierno de retomar la ofensiva.

De todo esto se deducen dos cuestiones significativas respecto al carácter del sector hegemónico en el heterogéneo Poder Ejecutivo del nuevo gobierno:

- a) Que estuvo conformado por un sector de la burocracia política peronista sin base propia, que favorecida por la táctica de Perón y frente al hostigamiento frontal de la dirección sindical, se alió con las fuerzas que demostraron capacidad para situarse en posiciones centrales en la movilización electoral;<sup>7</sup>
- b) Que la redefinición de la coyuntura luego del pronunciamiento electoral frente a la R.A. agotó la vigencia de su función táctica, lo dejó librado a sus propias fuerzas y lo situó en términos cada vez más contradictorios con el proyecto estratégico de Perón.

Se podría decir que el punto en que se constituyó esta contradicción no estaba tanto en lo que el gobierno hacía como en lo que dejaba de hacer. En efecto, el Ministerio de Economía estaba conducido por la dirigencia de la Confederación General Económica y sus primeras medidas: el “paquete” de proyectos de ley enviado al Parlamento Nacional y la firma del Acta de Compromiso Nacional entre la CGT, la OGE y el

<sup>7</sup> La heterogénea vertiente que conformaron los sectores radicalizados del peronismo juvenil tenía como base social, hacia fines de 1972, principalmente a sectores medios, empleados, estudiantes e intelectuales, habitantes de Villas de Emergencia y pequeños grupos del sector obrero industrial.

Estado,<sup>8</sup> estaban en lo fundamental dentro de la orientación programática de la Hora del Pueblo y diversos documentos conjuntos de la CGT y CGE de 1972. De modo que en este plano no hubo un sobrepasamiento hacia la izquierda del programa del FREJULI.

En el plano de las decisiones políticas se produjo como hecho significativo —en el interior del Estado— el descabezamiento de la cúpula del Ejército, lo cual, de algún modo, “era lógico” dado los términos en que se había librado la batalla.<sup>9</sup> Se designó entonces, violentando el escalafón de la fuerza, como Comandante en Jefe al general Calcagno, ubicado en una línea nacionalista que intentaba redefinir el concepto de Seguridad Nacional en términos de lucha contra la dependencia y por la autodeterminación nacional y que trató de reubicar el Ejército en los nuevos términos en que se presentaba la situación política.<sup>10</sup> Sin embargo, se puede presumir que el grueso de la fuerza no compartía tal posición, a lo sumo, en un momento de vacío de línea política, podía tener una convergencia táctica con tal posición para reacomodar a la fuerza en el proceso, pero como clivaje de fondo, estructurador de grandes corrientes era embrionario.

Con todo, la posición de la nueva cúpula del Ejército por lo menos lo neutralizaba frente al problema que consideramos crucial de esta fase: la eventual gestación de nuevos centros de decisión política a partir de la conexión entre franjas del gobierno —presidencia incluida— y la movilización social activada ahora con nuevos bríos y que presentaba focos de politización radicalizados.

## 2.b. *Los dos bloques electorales y los tres ejes político-históricos*

La opción electoral unificó en dos grandes bloques un proceso que desde la asunción del nuevo gobierno fue evidenciando cada vez más claramente estar constituido por el conflictivo entrecruzamiento de tres grandes cauces político-históricos:

- <sup>8</sup> El carácter de estas medidas, producidas incluso días antes de la renuncia de Cámpora, lo analizaremos, violentando la cronología, en relación al proyecto político que luego impulsará Perón desde la presidencia.
- <sup>9</sup> Lo que comportó el paso a retiro de un grupo de altos oficiales que constituían una importante élite política en el Ejército argentino.
- <sup>10</sup> Uno de los hechos significativos de esta etapa fue el llamado Operativo Dorrego, realizado conjuntamente por el Ejército y la Juventud Peronista y que consistió en la realización de diversas tareas de asistencia social en ciertas zonas. Quizás fue un fugaz punto de cruce entre la estrategia a largo plazo de la Juventud Peronista de fracturar al Ejército para reagruparse con un ala del mismo y la táctica inmediata de la cúpula militar de generar canales integrativos para sectores que se radicalizaron en el periodo anterior en parte por la ausencia de mediaciones institucionales.

- a) el basado en la conexión —no representativa partidaria— de los sectores económicamente predominantes (de ahora en adelante s.e.pr.) con el Estado, en dirección a un desarrollo capitalista subordinado respecto al gran capital internacional;
- b) el que proponía la renegociación de los términos de la asociación y relaciones del capital nacional respecto al capital internacional y a la burguesía terrateniente pampeana, en los marcos de un proyecto nacionalista hegemónico por sectores de la burguesía argentina, y
- c) el representado por una amplia gama de tendencias que abarcaban desde proyectos socialistas hasta otros capitalistas de Estado, pero que en los marcos del tipo de dinamismo económico y político argentino de ese entonces eran también altamente conflictivos con los sectores económicamente predominantes.

Estos últimos sectores fueron los que a partir de su desarrollo propio y las favorables circunstancias que se les abrieron intentaron —haciendo justamente un uso intensivo del tiempo— transformar su influencia agitativa en crecimiento político, organizado y más definido ideológicamente. Esto era lo que el gobierno “dejaba hacer”. Desde el “pasado de cuentas” que significó por parte de la izquierda peronista y no peronista la obtención de la amnistía de presos políticos y de miembros de grupos armados —algunos ya con altas condenas legales— la noche de asunción del mando presidencial hasta permitir la abierta presencia de estos sectores en una secuencia de conflictos de fábricas que tendían a aumentar estimulados por las posibilidades que ofrecía la política económica mercado-internista, la tendencia a reeditar en el plano laboral el éxito electoral, etcétera.<sup>11</sup>

Este proceso vinculaba entonces diferentes instancias que configuraban una trama de poder: sectores del aparato de gobierno, organizaciones políticas y centros de decisión de base que se generaron en los conflictos, en medio de un clima altamente convulsionado del que se llegaba a hablar en términos de un “nuevo orden”. Por otra parte, esto se conectaba con definiciones doctrinarias en el plano de la política internacional marcadamente antinorteamericanas y de acercamiento a Cuba y a Chile, aún bajo la presidencia de Salvador Allende.

El desarrollo en el tiempo de este proceso hubiese llevado seguramente a alterar los términos en que se venía planteando recurrentemente el enfrentamiento entre el populismo y los sectores predominantes de la burguesía argentina: en ello estaba en juego la redefinición política del sector

<sup>11</sup> Véase el artículo “El significado de las luchas obreras actuales”, revista *Pasado y Presente* 2/3 (nueva serie), julio 1973.

asalariado fuera de los marcos de la hegemonía de la burguesía nacional, aunque —principalmente— desde dentro del Movimiento peronista.

He aquí entonces, el eje de reordenamiento inicial del cuadro político, y en un doble sentido; en el del cambio de “lugar” de cada fuerza y en el de sus redefiniciones políticas. En efecto, su primera consecuencia fundamental fue la interiorización en el movimiento peronista y en el gobierno de la lucha política principal.<sup>12</sup> El regreso de Perón a la Argentina del 20 de junio de 1973 marcó un hito fundamental. Su idea central de ese momento: que los peronistas retomasen la dirección del peronismo, fue el cauce principal de los sucesos inmediatos.<sup>13</sup> Así, frente a los sectores radicalizados que lo enfrentaban cada vez más frontalmente, el jefe justicialista fue el centro de convergencia de un conjunto de fuerzas internas y externas al peronismo: recibió la presión activa de los sectores de derecha de la burocracia política peronista y de la dirección sindical, el apoyo —en cuanto al significado institucional del conflicto— del radicalismo y de casi todos los partidos parlamentarios, y un “dejar hacer” con que a su vez los sectores que el mismo Perón denominó como “retardatarios” utilizaron la lucha interna en el peronismo gobernante para ordenar su “retirada”.

Seguramente con la presión de las Fuerzas Armadas y el detonador que significó la exigencia de su renuncia por parte de la dirección sindical, antes de haber llegado a cumplir dos meses de mandato, Cámpora presentó su dimisión. Este hecho se podría designar entonces, como un golpe de Estado dado desde dentro del movimiento gobernante con el consenso pasivo de la mayoría: en definitiva para las grandes masas, lo que estaba en juego era la vuelta de Perón a la Presidencia de la nación. Las fuerzas políticas hegemónicas en la sociedad civil hicieron valer su supremacía respecto a la alianza personalizada en el Poder Ejecutivo por Cámpora. Se produjo entonces un mayor ajuste entre la escena política y las reales relaciones de fuerzas políticas.

<sup>12</sup> El Partido Justicialista, a pesar del gran consenso que tenía, no estaba constituido orgánicamente con relaciones de fuerzas internas relativamente bien definidas. Ello era producto de la particularidad del peronismo como Movimiento Nacional, pero, además, la rapidez del desenlace de la R.A. hizo que la constitución de las listas de los candidatos que luego ocuparían cargos de gobierno contuvieran una explosividad inmediata motivada por los intentos de los diferentes sectores de mejorar sus posiciones provisorias.

<sup>13</sup> Ello se expresó también en la lucha ideológica que libró Perón, cuyo blanco central en una primera etapa fue la recaptura en el interior de la doctrina justicialista de los componentes del discurso populista que, por haber sido interpretados desde universos de descifres marcados por la exclusión política y económica y por las posibilidades que ofrecía su alta carga de significaciones contradictorias, presentaba en el saber popular, hacia 1973, el privilegiamiento de sus elementos distribucionistas, nacionalistas, obreristas, etcétera. Su creciente autonomización respecto de su matriz ideológica originaria los situaba al borde de ser objeto de reinscripciones y recombinaciones subordinadas en otros cuerpos doctrinarios.

### 3. *El gobierno de Perón*

#### 3.a. *El proyecto hegemónico y sus bases económico-sociales*

Las elecciones de septiembre de 1973 acentuaron el pronunciamiento de marzo y produjeron, a la vez, un alto grado de correspondencia entre el gobierno y la hegemonía política vigente en la sociedad argentina.<sup>14</sup>

Contando con amplias bases consensuales, desde la asunción presidencial del general Perón, se intentó estabilizar un régimen político constituido por la convergencia alrededor del Poder Ejecutivo de cinco instancias fundamentales de poder: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical en el plano político partidario, la CGT y la CGE en el corporativo y las Fuerzas Armadas. Los centros de decisión políticos principales se encontraban entonces en un conjunto de relaciones institucionales en las que se vinculaba el sistema democrático representativo de partidos y diversos organismos de Compromisos en los que se acordaron las metas globales y las relaciones sectoriales económicas entre el Estado y las organizaciones corporativas.<sup>15</sup> Las que, por otra parte, tienen en la Argentina singular importancia como mediación estable entre el Estado y el mundo de la producción para cualquier mínimo plan de desarrollo y entre las clases y el poder político en razón directa con la crisis crónica de los partidos políticos. Obviamente, el logro de la incorporación de las Fuerzas Armadas en este sistema de poder era condición de posibilidad del mismo a mediano y largo plazo.

Estos debían ser los pilares organizacionales de una fase definida como de Reconstrucción y Liberación Nacional y que depositó la posibilidad de la expansión económica centralmente en la redefinición del peso relativo de los circuitos de acumulación a favor de fracciones de la burguesía argentina hegemónicas por sectores con importante nivel de concentración. La estrategia suponía la alianza con sectores propietarios menores

<sup>14</sup> En esta oportunidad el 80% creció hasta un 87%, y sus integrantes estaban más claramente ubicados a partir de la política de acuerdos que se fue desarrollando entre el justicialismo y el radicalismo y la explícita posición de votar a Perón por parte de la Alianza Popular Revolucionaria. El candidato opositor fue Francisco Manrique, que a su vez disminuyó su caudal obtenido a 12,13% de votos.

<sup>15</sup> El acuerdo entre el Partido Justicialista y el Radical se vinculaba también con el funcionamiento de la Asamblea Multipartidaria, que congregaba a casi todo el espectro partidario argentino y que fundamentalmente se planteó funciones de reaseguro institucional democrático representativo. El Acta de Compromiso Nacional entre el Estado, la CGT y la CGE, conocido como el Pacto Social, se firmó en junio de 1973, luego le siguieron el Acta de Compromiso del Estado, entre el gobierno central y diferentes gobernaciones en agosto de 1973, el Acta de Compromiso Agropecuario, etc.

y una política de redistribución de ingresos y de reformas sociales a favor del sector asalariado.

Según la concepción de Perón se debía ir generando una relación de enlace orgánico entre el proceso económico y el régimen político cuya meta fue designada en términos de Comunidad Organizada, aunque sus rasgos específicos como sociedad no se llegaron nunca a formular de manera acabada. De allí la relevancia de la función de las ideologías como mediadoras simbólicas entre las funciones productivas y el poder político. La doctrina justicialista —situada en una Tercera Posición integral frente al capitalismo demoliberal y el socialismo internacional dogmático— debía consolidarse como sentido común nacional, como proveedora de las ideas-fuerzas aptas para no desajustar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en particular, el vínculo Líder-masas, en el conflictivo itinerario hacia la Argentina Potencia.<sup>16</sup> Ello era fundamental en la medida que posibilitaría con “tiempo” y no con “sangre” el fracturamiento y pérdida de peso relativo de los sectores económicamente predominantes y la ampliación de las bases de apoyo productivas y sociales del gobierno.

Tal reordenamiento interno de la formación social argentina exigía dotar al Estado de una mayor autonomía decisional en el plano internacional. Su incorporación independiente en el bloque de países del Tercer Mundo, la apertura sin “fronteras ideológicas”, de nuevos mercados y la integración latinoamericana eran los lineamientos básicos inmediatos para reinscribir al país en un cuadro internacional que ofreció a la posición argentina márgenes de posibilidades dados por un lado, por los términos favorables en que se presentaba un mundo multipolar, la existencia del bloque tercermundista y las nuevas circunstancias del mercado mundial, en particular la decisión del gobierno norteamericano respecto al comercio exterior de los Estados Unidos, la que facilitó la percepción por parte de sectores empresarios de la problemática de la subordinación económica del país y los dispuso más favorablemente para tal diversificación de mercados, etcétera y, por otro lado, por los términos desfavorables que introducía la acentuación de la lucha por la redefinición de áreas de influencia entre las superpotencias, el contexto geopolítico cada vez más adverso y la presencia de los múltiples mecanismos de descarga hacia la periferia de la crisis en los países centrales.

<sup>16</sup> Sin embargo, una de las desconcertantes características de este proceso era la distancia que por momentos parecía abrirse entre los postulados doctrinarios y las decisiones tácticas de Perón en el ejercicio de su función principal: la de conductor político. Ni cada actitud política del líder justicialista suponía un preciso correlato doctrinario que la explicaba, ni su comportamiento estaba constituido por una suma de hechos pragmáticamente regulados. Se hace necesario, pues, avanzar en el estudio del nexo interno, de mayor o menor elasticidad, entre el plano ideológico —particularmente el estructurado como doctrina— y su comportamiento político.

### 3.b. *El desplazamiento del terreno para el cambio de las relaciones de fuerza políticas*

La puesta en marcha desde el gobierno de una orientación global que —esquemáticamente— a la inversa del proyecto de 1966 se propuso desde un régimen político con amplias bases consensuales dilatar su apoyatura económica, es decir, trasladar a los circuitos de acumulación su superioridad política, desplazó en una primera etapa el punto neurálgico en que se desarrolló la lucha por el cambio de las relaciones de fuerzas políticas a la articulación central entre el régimen político y el dinamismo económico: el Pacto Social. Esto nos lleva a realizar una reconstrucción del proceso económico en sus lineamientos generales, sólo en función de retomar luego el análisis a nivel de los condicionamientos que produjo en la conformación de las relaciones de fuerzas en el nivel político.

#### 3.b.a. *Las contradicciones en el circuito económico*

Desde mayo de 1973 hasta octubre de 1974 el Ministerio de Economía es conducido por la dirigencia de la CGE. Dentro de este tramo y hasta la muerte de Perón, el ministro José B. Gelbard contó con el apoyo explícito del líder del peronismo. Es entonces cuando se aplica una orientación con un grado aceptable —sobre todo en un comienzo— de control del dinamismo económico. Ella se manifestó principalmente a través de un conjunto de medidas y disposiciones legales: la naturaleza misma del proceso político impidió el pasaje a un planteamiento a mediano plazo con prioridades y ponderación de metas detalladas.<sup>17</sup>

Las alteraciones que la aplicación de las medidas produjo no llegaron nunca a comportar cambios en el sistema jurídico de propiedad de los medios de producción. Sin embargo, supusieron interferencias serias en el circuito de reproducción del capital que obstruyeron ciertos cauces de acumulación y fortalecieron otros. Introdujeron diversos desvíos en la redistribución interpropietaria de la masa de valor generada en el área de la producción. En el primer lugar, aislaremos en términos más abs-

<sup>17</sup> Las medidas principales fueron las contenidas en diversas Actas de Compromiso, las medidas impositivas, sobre todo para el campo, un conjunto de leyes, particularmente, el "paquete" enviado al Congreso Nacional en junio de 1973. En el denominado Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, dado a conocer a fines de 1973, estaban contenidas las metas globales económicas, por cierto ambiciosas: se planteaba incrementar la producción de 1973 a 1977 a una tasa del 7.5% anual redistribuyendo la renta a favor del sector asalariado de modo que el ingreso real de los trabajadores creciera a una tasa del 7.5% anual, lo que sería efecto, tanto de un aumento del salario real como del nivel de ocupación, etcétera.

tractos esos puntos de obstrucción y de desvío para luego internarnos en la secuencia histórico concreta de aplicación de la política económica.<sup>18</sup>

Los parámetros centrales a través de los que intervino la flamante asociación entre el Estado y el capital nacional fueron los siguientes:

1. Se establecieron brarreras defensivas frente al capital extranjero. Mediante la ley 20557 se intentó regular sus actividades de modo que fuesen compatibles con el "interés nacional" a través de: a) el control del funcionamiento de las empresas ya instaladas y un régimen de aprobación de eventuales nuevas inversiones, lo que intentó someter las decisiones económicas de las grandes empresas de la discusión en el Parlamento y el Poder Ejecutivo, es decir, al tamiz de los intereses de las fracciones menores del capital nacional que dominaban la escena política representativa; b) la prohibición para el capital extranjero de realizar inversiones en determinadas áreas ligadas a la Seguridad Nacional y de adquirir acciones de empresas nacionales, etcétera; c) la intervención en el giro de sus capitales mediante el establecimiento de topes en la transferencia de utilidades al exterior y el bloqueo al acceso al crédito bancario.

2. Se impulsó mediante medidas impositivas la explotación intensiva capitalista del campo. En particular estaban dirigidas a estimular un cambio en la modalidad de producción en la Pampa Húmeda para resolver la contradicción entre el comportamiento del sector terrateniente —regulado por la mayor rentabilidad de la explotación extensiva— y las necesidades de la acumulación del capital en escala nacional. De modo de participar en la renta diferencial que tiene a nivel mundial la producción pampeana de carnes y cereales mediante el control del comercio exterior, la fijación de precios para los bienes salarios, la ampliación del mercado interno para ciertas ramas industriales, etcétera.

3. Se nacionalizaron los depósitos bancarios de modo que, el Banco Central hubiese podido constituirse en el único intermediario financiero del país, la utilización de esta vía para modificar los montos de distribución del dinero bancario entre los diferentes sectores comportaba la posibilidad de un mayor acceso al dinero no propio de sectores empresarios nacionales.

4. Se impulsó una gradual redistribución del ingreso más favorable al salario —en particular los básicos— con lo que se buscó la expansión de amplias franjas industriales —incluso extranjeras— asentadas en el

<sup>18</sup> La orientación económica supuso diversos ritmos, modos, grados de aplicación —en particular la legislación— que, en parte, se reconstruye más adelante, pero que exigen, para una visión dinámica de la misma, un trabajo investigativo particular que se sitúe en un horizonte de preguntas de otro orden.

mercado interno de consumo masivo, lo que llevaría a estimulantes efectos en la cadena productiva en general.

5. Se estableció una inédita política de apertura de mercados externos, que incluyó, junto a los productos tradicionales, nuevos rubros industriales.

### 3.b.b. *El proceso económico*

Las bases iniciales de la expansión se encontraron en la ampliación del consumo interno, en el aprovechamiento de la muy favorable situación de los precios agropecuarios internacionales y en la emisión monetaria. En junio de 1973 se aumentó el salario alrededor de un 20% y se congelaron los precios en el nivel anterior a marzo de ese año. El Estado compensó parcialmente sus futuros mayores egresos con un aumento de las tarifas públicas.

El reajuste en la distribución de la renta que suponían estas medidas encontraron en un principio márgenes de compatibilización mínimos con la rentabilidad empresarial pues se pudo cubrir la creciente demanda merced a la utilización de la capacidad instalada ociosa, las reservas de stocks y la utilización del dinero barato brindado por las nuevas líneas de crédito. En términos generales, aunque la cuota de ganancia no era del todo satisfactoria se compensó momentáneamente con el aumento de su masa. Por su parte, el sector agro-exportador atravesaba desde comienzos del año una situación muy favorable por el boom de los precios internacionales en su rubro y, si bien ellos luego cayeron relativamente en lo interno, se mantuvo mínimamente retribuido.

Por otra parte, los mencionados precios internacionales agropecuarios, las reservas de stocks de insumos industriales, etcétera, produjeron un comportamiento satisfactorio de la balanza de pagos.

Si bien la política distributiva no se proponía metas espectaculares inmediatas, sino un gradual y controlado reajuste, fue el terreno en el que se generaron las presiones sectoriales más fuertes y, particularmente las de más directos efectos en el plano político.

El precario equilibrio de ingresos establecido en junio de 1973 fue crecientemente cuestionado por exigencias principalmente del sector exportador pampeano, el que primero planteó el ajuste de los precios agrícolas internos según el nivel de los internacionales y, luego, exigió precios compensatorios para las carnes ante el cierre del Mercado Común Europeo. Por su parte el sector industrial, si bien no tuvo desde un comienzo una política de exigencias y planteos como el agropecuario, fue siendo afectado por la caída de la rentabilidad, la que: a) ya en el momento de asunción del nuevo gobierno era —aunque lógicamente de manera desigual— en general insatisfactoria, b) fue afectada por el

aumento del salario real y el congelamiento de los precios, que le ponía un límite a su reajuste no suficientemente elástico y c) que fue sintiendo el impacto del alza internacional de los precios de insumos y de bienes de capital, variable altamente significativa dada la poca integración vertical del aparato productivo argentino en su sector industrial.<sup>19</sup> Lo que comenzó a llevar a la vulneración de los precios oficiales.

De modo que, a lo largo de 1973, se produjo una leve declinación del salario real, que fue percibida por el sector asalariado con el fino registro de un sector que pujaba por situarse en mejores posiciones bajo el sistema del éxito político y las posibilidades de la fase expansiva del ciclo económico. Este era un comportamiento típico del movimiento peronista como tal, con sus componentes ideológicos distribucionistas y de justicia social y que posibilitó la existencia de una heterogénea realidad en el plano de la orientación política de los conflictos. Se produjeron entonces una secuencia de paros y otras formas de lucha en plantas industriales, en algunos casos de importante magnitud. A tal punto que hacia marzo de 1974 se tuvo que adelantar el reajuste del Pacto Social previsto para junio de ese año: se puso en discusión entre la CGT y la CGE un reordenamiento de precios y la irreductibilidad de posiciones fue tal que debió laudarse el propio Perón, llamado, quizás más rápido de lo previsto, a arbitrar directamente en conflictos internos a la alianza obrero-empresaria que conformaba la base social de apoyo al gobierno. Se produjo entonces una situación cargada de implicancia en lo referente a las posteriores posibilidades de variación de las relaciones de fuerzas políticas. En efecto, el deterioro del salario desde el ajuste de junio de 1973 había sido del 6 al 9%, y Perón laudó fijando un aumento salarial del 15%, con lo cual el salario real llegó a representar en la renta nacional el 47%, es decir, la meta para 1977. El salario vulneró, pues, el Pacto Social en su versión originaria y puso a prueba los márgenes de tolerancia del capitalismo argentino para tal política distributiva. El aumento controlado y selectivo de precios que también contemplaba el reajuste del Pacto se transformó entonces en una creciente vulneración de sus límites por parte de los empresarios: el aumento del costo de vida, que fue del 1,6% en febrero y 1,2% en marzo pasó al 2,8% en abril, 3,3% en mayo y 3,8% en junio. De modo que en este último mes se debió otorgar medio aguinaldo extra compensatorio para los asalariados.

<sup>19</sup> La política de precios máximos congelados, el aumento del salario real, el alza marcada de los precios internacionales de los insumos, son datos que permiten sacar conclusiones con cierto grado de certeza respecto a la tendencia declinante de la rentabilidad empresaria. Además, cálculos de la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de Valores y diversas encuestas privadas a grupos de empresas constataron —aunque posiblemente de modo exagerado— dicha tendencia.

El sector industrial comenzó a encontrar entonces una franca válvula de escape para la recuperación parcial de la rentabilidad en el debilitamiento del Pacto Social, lo que, además, hacía aún más relativa la representatividad que sobre el sector tenía la CGE.

Sin embargo ello no supuso su canalización hacia la reinversión productiva. Las empresas menos controlables, las que podían más fácilmente vulnerar los precios oficiales eran las medianas y pequeñas y la compensación que podían obtener mediante tal procedimiento sólo les sirvió para mantenerse en funciones de modo precario. Por su parte, las más afectadas por el control de precios, el grupo de empresas de mayor concentración y centralización en sus ramas, podían absorber mejor la situación debido a su mayor posibilidad de regular la relación entre los costos y la capacidad instalada, su mayor cobertura internacional, etcétera. De todos modos, éstos eran recursos defensivos que no alcanzaban a resolver sus necesidades objetivas y a colmar sus expectativas subjetivas de recuperar una rentabilidad aceptable.

Entonces, crecientemente, fueron implementando un desvío no productivo del giro de sus capitales hacia la especulación financiera, inmobiliario, etcétera. En algunos casos, se llegó hasta crear formalmente empresas menores a las que se les vendía la producción a los precios oficiales, las que luego la revendían en el mercado negro. Las maniobras de las grandes empresas neutralizaron en parte la caída de la rentabilidad, y en algunos casos seguramente las aumentó significativamente, pero contenía un vicio básico; la distorsión profunda del ciclo de rotación del capital que afectaba directamente su reinversión productiva.

Este comportamiento se combinó con los reclamos abiertos del sector pampeano que contenían a modo de presión la disminución de la producción, el desabastecimiento, etcétera y con el contrabando que en ciertas regiones se realizaba hacia países limítrofes donde se vendía a mejores precios. Su resultado fue el bloqueo del pasaje a un segundo momento de expansión sostenida tal como esperaba la conducción económica. En los límites estructurales en que se produjo la expansión, la caída de la rentabilidad funcionó de inmediato generando comportamientos que se expresaron en los primeros síntomas recesivos. Se llegó entonces al punto en que el tipo de vinculación entre el proceso económico y el régimen político que esperaba gestar el gobierno comenzaba a tener su terreno de prueba central en su capacidad de fraturamiento y gobernabilidad de los s.e.pr.

### 3.b.c. *La gobernabilidad de los sectores económicamente predominantes*

Los s.e.pr. ya habían atravesado por experiencias concretas de vinculación con orientaciones económicas favorables o compatibles directamente con sus intereses, lo que juntamente con las definiciones ideológi-

cas en sus sectores más politizados, se combinó para bloquear subjetivamente la posibilidad, si no de una adhesión, por lo menos de una expectativa que hubiese dejado pendiente, a la espera de la prueba de los hechos, su definición respecto a las posibilidades que les ofrecía la conducción económica. Pero, a la vez, ello se realimentaba en el plano objetivo con que el desarrollo en el tiempo del proceso aumentaba la tensión entre el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Economía y las tendencias de la causalidad estructural a las que estaban sometidos en tanto agentes económicos.

Ahora bien, aun en el marco de una situación defensiva en la escena política, el comienzo de la vulneración recesivo-inflacionaria de la orientación de gobierno encontró su condición de posibilidad a nivel de la particular inscripción de los s.e.pr. en las formas del dinamismo económico y de su relación con el Estado en sus funciones técnico-administrativas.

En efecto, en el sector industrial, las grandes empresas, particularmente las transnacionales, tenían un peso fundamental, sobre todo luego de la aplicación del plan desarrollista durante la presidencia de Arturo Frondizi. Los indicadores cuantitativos macroscópicos: incidencia en el producto bruto, grado de dominio del mercado, productividad por persona ocupada, etcétera, lo demuestran claramente, pero —y esto es lo que queremos remarcar— desde un punto de vista, digamos, dinámico la incidencia de su comportamiento sobre el resto de la economía fue decisiva. Señalemos sólo tres ejes de maniobra: a) los efectos que producía merced a sus eslabonamientos hacia adelante como oligopolios vendedores y hacia atrás como oligopolios compradores respecto de amplias franjas menores de la burguesía, b) su superioridad tecnológica y su capacidad de condicionar el perfil de mercado en general, c) su elástica articulación entre diferentes sectores productivos y entre éstos y los financieros y comerciales, que no sólo significó su enorme peso económico, sino también la fluidez con que un mismo grupo económico pudo elegir en cada caso el terreno desde donde operar respecto al conjunto, etcétera.<sup>20</sup>

El sector agropecuario, fundamentalmente el de los grandes propietarios pampeanos, contaron con; a) su capacidad de presión (disminución de áreas sembradas, liquidación de vientres, etcétera) como proveedores principales de divisas por la exportación y de bienes-salarios; b) el margen que le dio frente al Estado no entablar su contradicción principal con un sector asalariado rural interno a su modo de producción, sino respecto a otros circuitos de acumulación urbanos. En efecto, estos sectores encontraron en la renta diferencial mundial que produjeron sus tierras la

<sup>20</sup> Véase el trabajo de Juan V. Sourrouille: *El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos: el caso de Argentina*, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976.

clave principal de su acumulación de capital, la fuerza de trabajo rural asalariada, ni por su número ya que sus explotaciones son extensivas ni por el excedente que produjeron, ya que como tal es mucho menos importante que lo que agregan las ventajas comparativas de las tierras a nivel mundial, fueron un contrapeso interno en la Pampa Húmeda susceptible de aliarse eficazmente al asalariado urbano y al empresario nacional para las funciones de control y puesta de límites al terrateniente pampeano.<sup>21</sup>

Estos márgenes de maniobra estructurales se realimentaron con las deficiencias que desde un punto de vista técnico tuvo el Estado para aplicar tal proyecto de gobierno. Era un aparato que: a) venía de un intento privatista como el de 1966, en el que el Estado, si bien debía tener alta eficiencia, no estaba conformado para intervenir en la economía de ese modo, sino como auxiliar de la iniciativa de las grandes empresas, b) hacia el final del periodo de la R.A. y como expresión de la prioridad de la "salida" política se había resentido aún más con la disolución del Ministerio de Economía y, c) no encontró en la sociedad civil suficiente personal técnico de recambio ni tampoco político dado que, además, la forma de conducción política de Perón había supuesto siempre la no consolidación de cuadros técnico-políticos que entrara eventualmente en competencia con su liderazgo, etcétera.

### 3.c. *Pacto Social, relaciones de fuerzas y régimen político*

La efectiva obstrucción de los circuitos de acumulación dominantes que produjo la política económica exigía un fortalecimiento del poder político tal que compensara la inferioridad estructural de los sectores empresarios hegemónicos. Teóricamente, tal fortalecimiento sólo era posible, en definitiva, mediante la consolidación y diversificación de los nexos entre el Estado y la sociedad, en tanto despliegue de la hegemonía política con que se contaba.

Pero la convergencia populista ya venía fracturada políticamente, de modo que el llamado fortalecimiento del Estado que planteó el gobierno se identificó en toda esta fase con la resolución de la lucha interna en el peronismo entre la conducción y los sectores radicalizados. Este hecho decisivo supuso, por un lado, el ataque frontal al gobierno y al Pacto Social por parte de sectores que estuvieron bajo la conducción estratégica de Perón y que se fueron diferenciando políticamente de un modo tajante, tendiendo incluso, por momentos, a comportamientos que suponían objetivamente considerarlo como su enemigo principal. Y, por otro lado, llevó a Perón a: 1) acentuar la desactivación de la movilización de las

<sup>21</sup> Véase el trabajo de Guillermo Flichman: "Renta del suelo y estructura agraria argentina", en la revista *Realidad Económica* No. 15, enero-febrero de 1974.

fuerzas sociales adictas, de modo que, una de las piezas históricamente centrales de su juego político, su relación directa con las masas, se vio resentida al evitar ofrecer su capacidad de convocatoria como terreno de disputa con los sectores radicalizados y como amenazante señal hacia los sectores "retardatarios", y 2) dejar hacer a los sectores de derecha del Movimiento en el desalojo, como en el caso de la provincia de Córdoba, de la escena política y de instancias de gobierno de diversos sectores del peronismo situados a su izquierda. Y, aunque Perón hubiese podido luego neutralizar a esos sectores de derecha y reencauzar el proceso, lo cierto es que esta circunstancia trasladaba la disputa política interna peronista al sistema institucional con su consiguiente deterioro y debilitamiento como tal.

De modo que este proceso llevó, por un lado, a que el fortalecimiento del Estado en términos inmediatos se midiera por la aptitud del gobierno para bloquear el desarrollo político de masas de los diversos sectores que representaban alternativas radicalizadas y no por su capacidad de fracturamiento y control de los s.e.pr. Y, por otro lado, a otorgar concesiones económicas a las fuerzas de apoyo del gobierno, principalmente en función de las demandas sindicales,<sup>22</sup> que vulneraban los límites objetivos (y las metas originarias del Plan Trienal) más allá de los cuales los diferentes intereses que se compatibilizaron en los comienzos del tramo expansivo, comenzaron a mostrarse contradictorios.<sup>23</sup> En efecto, trabada políticamente la posibilidad de una disminución de la ocupación y de una eventual descarga hacia determinadas regiones de los costos de la expansión, la exacerbación de las conquistas corporativas de los componentes de la convergencia populista llevó crecientemente al despliegue de sus contradicciones mutuas.

De modo que, desde el punto de vista del desplazamiento de las fuerzas, se llegó al momento en que: a) se resintió por dentro la convergencia policlasista que constituía la base de apoyo del gobierno y, b) la vulneración del Pacto Social por parte de sus principales sostenedores se convirtió en el disparador de la franca contraofensiva de los intereses del capital urbano y rural más concentrado e internacionalizado.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Además del aumento salarial de marzo y de la política emisionista con que se respaldó costos industriales, sería interesante indagar en la estructura del gasto público el muy marcado aumento de las transferencias de recursos a las provincias que tuvieron lugar en este periodo: la política de alianzas con sectores regionales y sus exigencias, etcétera, en parte se podría detectar desde estos datos.

<sup>23</sup> Adolfo Canitrot, *op. cit.*, p. 348.

<sup>24</sup> Un intento de detectamiento de las nuevas configuraciones estructurales económicas que estaban operando en el interior de este proceso, puede encontrarse en los trabajos de Juan Llach y Pablo Gerchunoff: "Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre los dos gobiernos peronistas 1950-1972" y "El nuevo carácter del capitalismo en la Argentina", en la revista *Desarrollo Económico*, números 57 y 58 respectivamente.

3.d. *Hacia una redefinición de las relaciones de fuerzas políticas*

Hacia mediados de 1974, la vulneración generalizada del principal articulador entre el Estado y la producción: el Pacto Social, se convirtió entonces en el principal condicionador de un reordenamiento del cuadro político tendencialmente adverso al gobierno, ya que, básicamente:

- a) afectaban a las relaciones entre el sistema de representación partidaria y el de Compromiso corporativo entre la CGT y la CGE. Los partidos fueron receptivos de los reclamos, encontrándose desde los que los asumían como intereses propios y contradictorios con el gobierno hasta los que los metabolizaban y los planteaban en términos de críticas constructivas hacia el gobierno, bajo la forma de sugerencias de rectificaciones parciales,
- b) segmentos del nuevo régimen se volvían contra el mismo. El Acta de compromiso agropecuario, que fue firmada inicialmente por el Estado y todas las organizaciones propietarias rurales menos la cúpula de los sectores terratenientes pampeanos agrupados en la CARBAP, ante la mencionada ausencia de un sector asalariado que la eslabonara con la CGT, de hecho supuso la constitución de un organismo cuyos miembros eran los representantes de los productores rurales y los funcionarios y técnicos del Estado, los que, a su vez, debían defender ante los reclamos de mejores precios la política distributiva del gobierno. De modo que nunca pudo ser una instancia con capacidad de decisión que fortaleciera al régimen en su conjunto, y terminó siendo, según el gobierno un organismo asesor y según la realidad una instancia de crítica a la conducción económica,
- c) si bien el conjunto de reclamos empresarios que se desataron luego del reajuste salarial de marzo no tenía un correlato opositor al gobierno de igual magnitud en el plano político y la gran masa empresaria no pasó en bloque a una posición política alternativa sino que se dispersó paulatinamente a través de la asunción de decisiones económicas individuales. Sin embargo, para ciertas élites empresarias opositoras, que nunca dejaron de operar con criterio político, esto no sólo no era un problema sino una virtud. En la medida en que su estrategia no pasaba por formar una fuerza opositora partidista—como analizaremos más adelante— este conjunto de comportamientos y reclamos eran captados por ellas con gran elasticidad táctica: bastaba con desestabilizar,
- d) por último, estos hechos comenzaron a producir una imagen de “desgobierno” apta para legitimar un conjunto de comportamientos económicos y políticos cuyo solo enunciado en marzo de 1973 era inverosímil.

### 3.e. *La nueva situación y la estabilización del régimen político*

Este nuevo momento, producido en gran medida por el desequilibrio que supuso —por decirlo de alguna manera— tener en una primera etapa el frente de conflictos principal hacia la izquierda en política y hacia la derecha en lo económico, exigió a Perón un gran esfuerzo por el fortalecimiento del “pentágono” central del régimen político. Su estabilización era una condición de posibilidad básica para contener a las fuerzas adversas y avanzar en la concreción del proyecto de gobierno en general. Por ello asumió una serie de medidas políticas tendientes a la convergencia y fortalecimiento de sus elementos desde los cuales a su vez recibía diferentes tipos de presiones:

- a) la dirección de la CGT, aunque nunca vio amenazado su control sobre el grueso del sector asalariado y sobre lo fundamental, sus núcleos productivamente más importantes, debió afrontar la emergencia de nuevas corrientes sindicales surgidas en el proceso de movilización social de los últimos años. Los puntos de fractura en el sindicalismo ya no se daban principalmente por divisiones originadas desde las cúpulas de los agrupamientos como fue de 1955 a 1969, sino por cuestionamientos desde nuevas agrupaciones surgidas en conflictos inorgánicos, comisiones, internas de fábrica, seccionales de gremios, etcétera, llegando a comprometer eslabones importantes del aparato sindical (SMATA de Córdoba, OUM de Villa Constitución, etcétera).

Desde el regreso de Perón en 1973 la dirigencia sindical contó con la inestimable ayuda de su apoyo político explícito y de un conjunto básico de conquistas salariales y sociales en general que realimentaron su relación con las bases. Al mismo tiempo, se aprobó la reforma, que ella había elaborado, de la ley de Asociaciones Profesionales<sup>25</sup> y que consolidaba su poder coercitivamente. De modo que su aplicación por parte del Ministerio de Trabajo, conducido por las 62 organizaciones peronistas, les fue permitiendo, junto con los otros factores mencionados antes, tanto la reapertura de segmentos del aparato sindical que se habían desprendido de su control en la etapa anterior, como la reafirmación de su hegemonía holgada en gremios claves como lo demostraron las elecciones de febrero de 1974 en la Unión Obrera Metalúrgica,

<sup>25</sup> La modificación de la ley 14455 de Asociaciones Profesionales estaba orientada a consolidar el poder de la dirigencia sindical fundamentalmente a través de: a) el cercenamiento de atribuciones y de la autonomía de las organizaciones básicas de primer grado en beneficio de las Federaciones zonales y regionales a las que estaban adheridas; b) la reglamentación de la vida interna de las organizaciones de base; c) la creación del llamado Fuero Sindical por el que se otorgaban a los integrantes de Comisiones Directivas de los sindicatos reconocidos las mismas prerrogativas que tenía un diputado frente al Estado y la Justicia.

- b) el reconocimiento gubernamental de la CGE como representativo de los empresarios forzó a la cúpula de la entidad que agrupaba al capital más concentrado, e internacionalizado, la Unión Industrial Argentina (UIA) a una fusión subordinada con la entidad que llevó a Gelbard al Ministerio de Economía. Lo que se concretó luego, en agosto de ese año, en una situación política diferente, pero que se gesta con el sentido aludido durante la presidencia de Perón,
- c) los partidos políticos, particularmente el Radical y los que conformaron la Asamblea Multipartidaria encontraron un inédito conducto conector con la CGT y la integración con centros de decisión corporativos que, aunque conflictiva, les brindaba una transfusión de poder que contrapesaba en parte las limitaciones que desde largos años venían demostrando. Por otra parte, el Poder Ejecutivo era receptivo de ciertas críticas y presiones. Es más, existió la intención de formar un Consejo de Estado, asesor del Presidente, formado por personalidades del radicalismo y de otros partidos menores,
- d) el gobierno intentó resolver el problema fundamental de no contar con apoyo militar. En realidad el peronismo accedió al gobierno, en esta oportunidad, merced a la derrota política de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, en primer lugar favoreció su salida de la posición defensiva en la que habían quedado situadas en la escena política: debían ocupar un lugar dentro del proceso de Reconstrucción Nacional, que a su vez lo legitime institucionalmente. Pero a Perón no le interesó obtener una definición política inmediata de las Fuerzas Armadas, la que necesariamente hubiese sido adversa, sino que, sobre la base de su incorporación neutralizada en política dentro del régimen, buscó interlocutores representativos de la misma.<sup>26</sup>

Con sus nuevas designaciones se inauguró en las Fuerzas Armadas la etapa del llamado "profesionalismo prescindente".

Pero la actitud de Perón sintetizada en el criterio de designación de los jefes de las Fuerzas Armadas, se inscribía en una estrategia orientada a introducir con el tiempo un nuevo clivaje político interno en ellas. En efecto, sobre la base de la demostración de la aptitud política y legal del régimen constitucional para encarar y resolver el problema de la guerrilla, su función central de garantizar la Defensa Nacional debería

<sup>26</sup> Así, Perón reemplazó en el Ejército como Jefe del arma al Gral. Calcagno —comprometido de algún modo con el primer tramo camporista— por el Gral Anaya. Esta designación respetaba el escalafón militar ya que era el oficial de mayor antigüedad, cualidad importante en un ejército que, luego del paso a retiro de la cúpula lanusista, no presentaba liderazgos netos. En cambio, en la Marina, aplicando el mismo criterio de representatividad, designó al Almirante Masera, quien ejercía un claro liderazgo dentro del arma.

ir asumiéndose en términos de lucha contra el “neocolonialismo” de las grandes potencias mundiales.

Ahora bien, en el corto plazo, la pieza central de este régimen era el liderazgo directo de Perón, su capacidad de convocatoria popular, principalmente de la clase obrera. Y este fue el aspecto que ocupó el centro de la escena política frente a la vulneración del Pacto Social, la recuperación de la iniciativa de los sectores económicamente predominantes y diversos síntomas de reactivación de la violencia política. Mantener y consolidar las relaciones de fuerzas a favor del gobierno exigió retomar contundentemente la iniciativa en el plano político. El 12 de junio de 1974 se produjo uno de los más significativos hechos de este periodo. La apelación que entonces realizó Perón y la respuesta popular<sup>27</sup> —que se emparentaba con las prácticas de sus primeros dos gobiernos— produjeron múltiples efectos inmediatos en el cuadro político:

- a) reafirmó la presencia del conductor del proceso frente a una situación cuyos síntomas económicos y sociales podían llegar a adquirir potencialmente una resonancia más amplia en el plano político,
- b) impidió la consolidación de una imagen política en que su liderazgo aparecía cuestionado, fundamentalmente a partir del enfrentamiento con la Juventud Peronista que había tenido lugar en el acto de celebración del 1o. de Mayo,
- c) demostró a sus aliados políticos y a las Fuerzas Armadas que su presencia era la que aseguraba el relativo equilibrio que se conservaba en el régimen político,
- d) recordó a las franjas de centro-izquierda que él era la garantía que avalaba la apertura al bloque socialista en lo económico en los términos en que se estaba realizando,
- e) y, por primera vez en esta etapa, formuló una advertencia directa a los sectores “retardatarios” representados por los diarios de la “oligarquía” insinuando la posibilidad de producir su control mediante la movilización popular frente al eventual sabotaje económico, lo que se podía hacer extensivo en el mediano plazo a cualquier intento de quiebra del orden institucional.

<sup>27</sup> En la mañana, el presidente habló sorpresivamente al país por la cadena nacional de radio y televisión y expuso explícitamente el conjunto de problemas que se venían produciendo, reafirmó su posición doctrinaria frente a las presiones de izquierda y de derecha y planteó que, de no reencauzarse el proceso, renunciaría a su cargo. Entonces, durante el día la CGT convocó a un paro y a una movilización de apoyo al Líder, que tuvo su culminación en el discurso que durante la tarde pronunció Perón en la Plaza de Mayo frente a la multitud congregada, predominantemente obrera.

### 3.e. *La problemática socio-política y la muerte de Perón*

Pero este hecho que tuvo una dimensión táctica en lo que hizo al control de la situación política inmediata, era expresiva, más sustancialmente, de un momento en que el populismo en el gobierno fue puesto a dura prueba por el dinamismo de la formación social argentina. En efecto, hemos dicho que dadas las condiciones estructurales en que se desplegó la expansión económica, se llegó al punto en que la baja inversión privada, dentro de un marco creciente inflacionario, inevitablemente comenzó a producir síntomas recesivos. Dadas las condiciones en que se desenvolvía el problema, el abanico de posibilidades que se abrían para encararlo desde el Estado tenía dos límites extremos: o avanzaba hacia la creación de una economía mixta mediante el desarrollo del sector productivo estatal, la transformación del régimen de explotación extensivo pampeano, la reconversión de la pequeña y mediana industria mediante el crédito y nuevas articulaciones productivas con el fortalecido sector de empresas estatales, la ampliación continuada de los mercados externos, etcétera, o la expansión de la capacidad productiva se intentaba mediante la profunda reconstitución de la tasa de ganancia en el marco de las ya clásicas políticas estabilizadoras.

El gobierno no parecía estar dispuesto a seguir ni uno ni otro rumbo. En efecto, la última alternativa suponía una asociación subordinada con el capital internacional que iba contra los intereses que se trataban de apuntalar desde el Ministerio de Economía y desde el componente social del plan del gobierno y cuestionaba el sistema de alianzas en que se asentaba. Pero, al mismo tiempo, la profundización de las contradicciones con los s.e.pr. suponía que el Estado adquiriese funciones que no eran exactamente las que impulsaban los sectores empresarios de la conducción económica, que concebían al Estado más como una instancia que allanara el camino a su acumulación como propietarios privados que como eje del proceso productivo. Por otra parte, la transformación del curso productivo hacia ciertas formas de capitalismo de Estado suponía contar con segmentos del aparato del Estado que estos sectores no controlaban. Con todo, el cauce en que se situaba el gobierno suponía un cierto avance del Estado en el interior del proceso económico mediante la aplicación del impuesto a la renta normal potencial, la eventual concreción de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley agraria<sup>28</sup> y el establecimiento de un régimen de comercialización interno apto para reducir significativamente las ganancias de la intermediación. Para la conducción econó-

<sup>28</sup> A comienzos de junio de 1974 se difundió periodísticamente y de modo extraoficial el texto del anteproyecto de Ley Agraria, mediante la cual el Estado hubiese intervenido en el campo a favor del fortalecimiento de una estructura capitalista de medianos productores privados y que contenía la posibilidad de aplicar ciertas medidas expropiatorias.

mica estas medidas, junto con la apertura de nuevos mercados externos y la diversificación de los productos de exportación generarían demandas cuya presión combinada llevaría a los empresarios a reanudar las inversiones.

De modo que la situación estaba llegando a un punto en que la continuidad del plan del gobierno requería una modificación sustancial del cuadro político a su favor. O el régimen político realizaba de manera mínimamente controlada la fase recesiva de modo de seguir impulsando el desarrollo de otros ejes de acumulación no predominantes o el dinamismo del ciclo colocaba a los s.e.pr. en inmejorable situación objetiva para presionar económicamente y gestar su contraofensiva política.

Fue en esas circunstancias que, el 10. de julio de 1974, murió el general Perón. En momentos en que desde la política se debía neutralizar las tendencias objetivas del ciclo económico que condicionaban crecientemente el proceso ampliando el margen objetivo de posibilidades para el desarrollo de alternativas políticas propias de las fracciones de clase que configuraban los nudos estructurales: el capital oligopólico urbano y rural de la clase obrera. Su liderazgo era, quizás, el factor decisivo en el corto plazo para tal eventual producción de relaciones de fuerza a favor del gobierno y parecía encaminarse a la compleja y difícil operación de: a) llevar el enfrentamiento a nuevos términos, más agudos, con los s.e.pr., b) consolidar la definición político ideológica peronista de la clase obrera de modo de obtener aceptación consensual para otorgar su aporte a la fase recesiva mediante la disminución del salario real y, c) bloquear, entonces, en el interior de la convergencia populista la posibilidad de que diversos sectores radicalizados, de origen peronista y no peronista, recuperasen la iniciativa política.

#### *4. Los intentos de recomposición del régimen político*

Crecientemente bloqueado, desde una primera fase, el desarrollo de alternativas políticas y de instancias de poder que hubiesen sacado del control de la burguesía argentina la movilización social y antiautoritaria encaminándola a un enfrentamiento antagónico con el sistema sociopolítico como tal, y ausente luego el Líder populista que, en el corto plazo, tenía un papel inmediatamente decisivo para intentar un tránsito políticamente controlado de la fase recesiva del ciclo económico, la etapa que se abre en julio de 1974 está caracterizada por un permanente intento fallido de recomposición de una nueva fórmula de poder.

La creciente autonomía que iba adquiriendo la escena política oficial estaba en relación inversa al creciente vaciamiento de poder del gobierno. La variedad y cantidad de hechos que se sucedieron en el régimen institucional generaban, por momentos, la impresión de una omnipotencia

de la política que también estaba en relación inversa a la creciente primacía, no ya "en última instancia", sino en lo inmediato, de los condicionamientos del ciclo económico.<sup>29</sup>

#### 4.a. *El desplazamiento del equipo económico*

La dirigencia de la CGE que conducía el Ministerio de Economía se convirtió, rápidamente, en una suerte de eslabón débil en la lucha por el control total del gobierno que se destacó desde la asunción presidencial de Isabel Martínez de Perón. En efecto, un conjunto de variaciones en los agrupamientos económicos, corporativos y políticos convergieron haciendo altamente vulnerable la posición del ministro Gelbard, otrora respaldado por el general Perón.

En primer lugar, se habían producido cambios significativos en la apoyatura social de la orientación económica. Ya no se trataba sólo del hostigamiento del sector agro-exportador, de la no integración en el esquema económico del sector de las empresas transnacionales o de los comienzos del desprendimiento del bloque populista de capas altas de la burguesía argentina, sino también del malestar de otras capas menores de la misma. En efecto, se puede presumir que a esa altura del proceso, eran escasos los sectores que podían convertirse en exportadores o compensar mediante el crédito, su apoyatura en el mercado interno, etcétera, la caída general de la rentabilidad. Las capas medias y pequeñas de la burguesía, con menos capacidad de maniobra productiva, financiera y comercial y que no encontraron en el Estado el respaldo necesario para su reconversión comenzaron a distanciarse de la conducción económica.

Por su parte, las medidas para reducir las ganancias de la intermediación habían volcado a un conjunto de sectores comerciales a la opo-

<sup>29</sup> La secuencia de este proceso nos tienta a encontrar sus claves en definitiva, en la alternancia de expansión y recesión del ciclo económico. El apogeo y la crisis del populismo estarían así entendidos desde un claro sistema causal, que no dejaría escapar ningún detalle sin su explicación. Sin embargo, son procesos específicamente políticos los que, en el corto plazo dejaron atado al gobierno a la secuencia del ciclo, lo cual no supone ninguna valoración acerca de su capacidad histórica, a mediano y largo plazo, para sortear el peligro de su derrumbe. Del mismo modo, las causas de sus limitaciones no estaban en su naturaleza social policlasista. Más bien ello fue una virtud neta, demostrada en presencia, pues potenció desde el llano su capacidad de bloqueo de los proyectos estabilizadores, y, en ausencia pues la fracturación del bloque popular, con el consiguiente aislamiento del sector asalariado, fue condición de posibilidad y, a la vez, objetivo de la contraofensiva de los sectores dominantes.

La capacidad o no de sortear los límites estructurales y cíclicos por parte de la convergencia populista se situaron en otra problemática, en la de la producción desde la política de las hegemonías internas a la misma.

sición de la conducción económica. En el sector agropecuario, así como las medidas impositivas ayudaban a fracturar a los propietarios, aislando a los sectores terratenientes más parasitarios, las demandas por el aumento de precios, que pasaron a ser cada vez más importantes, reordenaron el cuadro involucrando a productores medianos y hasta pequeños en diferentes tipos de convergencias —objetivas y/o subjetivas— alrededor del sector más apto para esta lucha frente al Estado: el terrateniente pampeano.

Por otra parte, en términos del funcionamiento global de la economía, la nueva situación política posibilitaba la actuación de factores inflacionarios que se habían ido acumulando en toda esta etapa: la importante emisión monetaria, la contención más allá de cierto límite del tipo de cambio a favor del peso argentino, la prolongada congelación de precios internos, etcétera. Todo ello comenzó a hacerse presente presionando por reajustes que hacían aparecer a la conducta económica perdiendo el control del proceso.<sup>30</sup>

Esto se iba a expresar también en el debilitamiento de la propia CGE, de la que comenzaron a desprenderse algunas filiales del interior del país. Por su parte, en la CGT, se habían producido cambios en su conducción desfavorables al equipo económico. En efecto, Perón había arbitrado internamente en el sindicalismo a favor de los sectores afines al proyecto de concentración y de alianzas con la CGE, los que, librados a sus propias fuerzas, fueron rápidamente desplazados por la dirección de las 62 Organizaciones peronistas que pujaban desde hacía años por otras formas de intervención del sindicalismo en el proceso político. Estos sectores no se orientaban hacia una alianza subordinada con capas del empresariado nacional; es que su función histórica, corporativa y política, en el interior del movimiento peronista y su ubicación objetiva en el marco de la crisis de los partidos políticos, habían convertido al sindicalismo en uno de los componentes centrales del poder. Sin embargo, su capa dirigente se reproducía en sus funciones dentro de los límites que le marcaba su relación corporativa con las bases y alternativas alianzas con fracciones y capas de clase con peso e iniciativa propia respecto a la sociedad en su conjunto. De allí su poder y su debilidad intrínseca. Ello encontraba su expresión concreta en la particular relación que establecían con los afiliados a los sindicatos y con el Estado, respecto al cual tenían una extrema vulnerabilidad, demostrada reiteradamente durante las últimas décadas, cuando desde los gobiernos se ensayaban medidas para colocarlo en posi-

<sup>30</sup> Una de las limitaciones de este trabajo es la de no realizar un análisis crítico interno de la orientación económica del gelbarismo y de sus modos de aplicación y de no aplicación. Ello exigiría un análisis específicamente económico que está fuera de nuestro foco de análisis y de nuestras posibilidades, sin embargo queda abierto el problema de la inflexión interna en el plano político de las medidas que generaba y que no generaba la conducción económica.

ción subordinada: desde el control de sus cuentas bancarias hasta la reformulación de la legislación que regulaba el funcionamiento de los sindicatos y la CGT. Lo que adquiría singular importancia en su conflictiva alianza con el sector comandado en el gobierno por el ministro López Rega. De allí su necesidad de controlar los movimientos del Estado y su simultánea limitación, como organización corporativa, de no poder ni querer hacerse cargo del mismo, lo que, como analizaremos más adelante, tendrá profundas implicancias en el comportamiento del sindicalismo en la etapa final de derrumbe del gobierno.

Pero además, en términos inmediatos, los sectores hegemónicos en las 62 organizaciones (metalúrgicos, textiles, etcétera) podían aspirar a conquistas salariales de mayor envergadura que el resto de los gremios por situarse en ramas con sectores altamente centralizados y concentrados y con posibilidades de otorgar mejores salarios en función de la mayor masa de valor producida, lo que estaba en parte bloqueado por el mecanismo de aumentos generales que contemplaba el Acta de Compromiso para los dos primeros años de gobierno.

Finalmente, desde estas premisas, se entiende que la fragmentación del sector empresario no dejaba de ser, tácticamente conveniente. Por todo ello, la nueva dirección de la CGT, en alianza con el grupo presidencial, presionará también por la renuncia de Gelbard.

En el plano político partidista, un aliado fundamental del esquema económico preanuncia en 1972 por la Hora del Pueblo, el partido Radical, se iba distanciando de la conducción económica en función de exigencias de reajustes de precios más a tono con la realidad del ciclo económico y de presiones de sectores propietarios agrarios en los que tenía parte de su electorado.

Y como si todo esto hubiese sido poco, sectores políticos tradicionales comenzaron una prédica —seguramente orientada hacia las Fuerzas Armadas— denunciando a la dirigencia de la CGE por determinados acuerdos realizados con el “campo socialista”. En efecto, la política de apertura de nuevos mercados mundiales no había encontrado en Europa Occidental, como esperaba Perón, a su principal interlocutor, sino que los negocios más significativos se habían podido establecer con países de Europa Oriental, algunos de los cuales suponían el intercambio de mercancías nacionales por el financiamiento y la realización de obras infraestructurales (diques, puertos, usinas hidroeléctricas, etcétera), los que eran denunciados apelando a la seguridad nacional frente a lo que se entendía que significaba intervención interna de ciertos países en sectores claves económicos y geopolíticos.

Ante tal fusión de factores adversos, y sin interés táctico de prolongar la situación, el equipo de Gelbard se retiró del Ministerio de Eco-

nomía. Con ello, se cerró una etapa de este proceso, que en su mejor momento encontró a Perón situado en el centro de la escena política y a la economía en una fase de real expansión.<sup>31</sup>

#### 4.b. *El apogeo y la crisis del "lópezreguismo"*

##### 4.b.a. *La consolidación en el gobierno*

El desplazamiento de la cúpula de la CGE supuso, ya claramente, que el gobierno quedaba en manos de una conflictiva alianza entre el grupo presidencial y la dirección sindical. En una primera fase, y hasta el denominado "rodrigazo", la iniciativa y la conducción del Gobierno estuvieron a cargo, principalmente, del sector hegemónico en el Poder Ejecutivo, conducido por el ministro y secretario privado de la presidente, José López Rega. Su propio carácter como microorganización política puede contener parte de la explicación de la creciente distancia que se fue estableciendo entre la apariencia de poder del gobierno y su poder real. Reconstruyamos brevemente este problema. La conformación de la fórmula electoral que llevó a la presidencia al general Perón estuvo condicionada por dos circunstancias políticas internas al peronismo: que la ascensión del Líder Justicialista se hacía a expensas de la derrota del "camporismo", lo que supuso la vigorización de sus vínculos con los sectores, digamos, situados a la derecha de su posición centrista, la que, por otra parte, le obligaba a dar una imagen de no opción por tendencia interna alguna. Ante el cálculo generalizado de su eventual muerte, la fiebre sucesoria venía agitando al movimiento peronista y, por lo tanto, la cuestión vicepresidencial adquiría enorme importancia. Por ello la incorporación de Isabel como candidata a la vicepresidencia contenía la doble virtud de representar una alianza interna ajustada al tipo de contradicción principal que se establecía entonces en el peronismo, y tener la apariencia de una no opción interna: en definitiva la fórmula era Perón-Perón.

Este hecho se redimensionó posteriormente cuando murió Perón y accedió entonces a la cúpula del gobierno un grupo que no estaba entroncado con vertientes políticas preexistentes en el interior del peronismo ni tenía anclaje como tal en la estructura productiva. El control del gobierno era su única arma y su posibilidad estaba en que la presidente había quedado jugando un papel objetivo que simbolizaba, para el resto

<sup>31</sup> Posteriormente, el ex-ministro Gelbard, utilizando fuentes oficiales, declararía que el producto bruto había seguido la siguiente progresión: en 1972, había aumentado en un 2%, en 1973 en un 4.8% y en 1974 en un 7%.

de fuerzas políticas, la continuidad constitucional, y para su Movimiento, el principal factor de contrapeso de la eventual disgregación de sus diferentes fracciones en pugna.

Por ello la muerte de Perón no significó la presencia de un espacio vacío a llenar: su liderazgo no era transferible, y no sólo por sus fuertes componentes personales, sino porque no era receptable por un grupo con esas características. De modo que su consolidación en la escena política requería un reordenamiento de las posiciones de poder relativas de los elementos constituyentes del régimen político. Entonces, desde la iniciativa política que en parte, se le otorgó en un primer momento, el grupo presidencial va a intentar:

- a) la reafirmación de la imagen presidencial manteniendo las características históricas del peronismo y estimulando la gestación de un liderazgo basado en su periódica y mesiánica relación directa con la base peronista, —particularmente la obrera. Lo que supuso: un limitado intento de manutención de la política distributiva (aumento salarial de noviembre de 1974) y de conquistas sociales (aprobación de la ley de Contratos de Trabajo) y de impulsar algunas leyes y aisladas medidas de nacionalización económica (“argentización” de las bocas de expendio de combustibles, anulación de los contratos telefónicos con la ITT y la Siemens, etcétera) y 2) el reforzamiento del control coercitivo de la sociedad civil mediante la reformulación de la legislación represiva, y
- b) una redefinición del sistema de alianzas heredado, que produjo una doble exclusión: dentro del gobierno a través de una búsqueda de homogeneización que incluso llegó a forzar la renuncia del Presidente de la Cámara de Senadores para dejar al Presidente de la Cámara de Diputados —miembros del grupo presidencial— como sucesor legal de la Presidencia en caso de su abandono por parte de Isabel.

Y, respecto a las diferentes fuerzas políticas, particularmente el partido Radical y los de la Asamblea Multipartidaria, mediante un manejo que tendió a desplazarlos de todo centro de decisión y/o presión y a reubicarlos en una relación con el gobierno, de hecho, limitada a su defensa constitucional.

Sin embargo, esta relativa consolidación suponía el comienzo del distanciamiento de la conflictiva alianza entre el grupo presidencial y la cúpula sindical respecto a la sociedad en general. A las características del grupo hegemónico se les agregaban las de una dirigencia sindical que entablaba una relación de representación con las bases a través de fuertes mediaciones institucionales, sobre todo en los gremios más fuertes, los que, por otra parte tenían sus jefes en la dirección de las 62 Organizaciones.

En parte por ello, la lucha interna en el gobierno tendió a tomar formas tan esotéricas, salvo en determinadas circunstancias críticas, no suponía la consulta ni comprometía de manera directa las diversas organizaciones de la sociedad civil a través de las cuales se constituían corporativa y políticamente las fuerzas sociales. De modo que todo parecía quedar pendiente de la resolución de la intrincada y sinuosa lucha en la cúpula del gobierno. Pero, en cierto sentido, en el manejo inmediato de asuntos de gobierno fundamentales, en realidad era así. El ejemplo paradigmático de ello fue el nombramiento como nuevo ministro de Economía, del doctor Gómez Morales, un prestigioso técnico de larga trayectoria peronista, pero no inscripto de manera directa en la lucha política interna, especialista en remontar fases recesivas, su designación, de hecho, fue “de transición”; desplazado el enemigo común, Gelbard, el nuevo Ministro era aceptable para ambos sectores mientras ganaban terreno en su lucha mutua y poder luego imponer sus candidatos al cargo que, como luego se demostró, ya estaban definidos con nombre y apellido, Celestino Rodrigo, del grupo presidencial y Antonio Cafiero, amigo de la cúpula sindical. Pero el tiempo económico no se dejaba encuadrar por el tiempo de resolución de la puja interna en el gobierno. Mucho menos cuando el proceso derivaba crecientemente hacia una economía de saqueo y cuando redefinía a favor de los s.e.pr. las posiciones estratégicas para pasar con mayor eficacia a la lucha política.

Frente a una economía “recalentada” por la combinación del sostén emisionista inflacionario de la expansión, la casi plena ocupación, la sostenida demanda interna y la casi nula reinversión productiva, Gómez Morales ensayó la aplicación gradual de medidas orientadas a la compresión del gasto público y la emisión monetaria, y al aumento y reajuste relativo de los precios y tarifas públicas, con la consiguiente disminución del ingreso asalariado. Pero, para el Ministro las medidas debían efectivizarse desde dentro del acuerdo social —recordando ciertos rasgos de su anterior gestión bajo la presidencia de Perón de 1952 al 55— y no quebrándolos. De modo que un reajuste controlado en la distribución entre salarios y rentabilidad, exigía resolver el siguiente dilema: si los precios no subían, se paralizaba aún más la inversión, pero su reajuste brusco y acelerado llevaba a vulnerar totalmente el acuerdo social y, si para evitarlo, fuese seguido de alzas similares en las remuneraciones, entonces, se desembocaba en un aumento de la inflación que volvería a limitar la inversión. La salida intentada fue la de obtener un considerable aporte de capital extranjero que, al mismo tiempo, ayudaría a revertir los problemas que comenzaban a presentarse en la balanza de pagos, originados, por un lado, por las dificultades en la colocación de exportaciones tradicionales (particularmente de carnes) y la detención de la política de apertura de nuevos mercados y, por otro, al encareci-

miento de los insumos importados, la devaluación del peso, pagos de la deuda externa, etcétera.<sup>32</sup>

Gómez Morales entendía que, sin el respaldo político explícito —sobre todo frente a la base social del gobierno y los centros financieros internacionales —por parte de la Presidente y del sindicalismo, su plan era impracticable. Pero ese aval no llegó nunca, y durante los 214 días de su mandato fue, cada vez más, limitándose a encarar los problemas de urgencia que se iban presentando.

De modo que el grupo presidencial iba ganando posiciones en el aparato de gobierno y en el Partido Justicialista, pero al costo de transformar esas instancias en algo cada vez más distante de las fuerzas sociales. Y las demandas del ciclo económico iban invadiendo, por así decirlo, el cuerpo social, suscitando comportamientos crecientemente ingobernables desde la cada vez más distante y excluyente cúpula gubernamental. Lo que se combinaba con una creciente activación de la violencia política, para generar en la sociedad civil una atmósfera de desquiciamientos, arbitrariedades y peligro personal.

#### 4.b.b. *La crisis del gobierno*

Gradualmente, el grupo presidencial fue capturando posiciones claves dentro del gobierno. Hacia mediados de 1975, se fue aproximando a una situación que comportaba un punto cualitativamente nuevo del proceso político. En efecto, en mayo se obtuvo la renuncia de Gómez Morales y del Comandante en Jefe del Ejército, general Anaya. Estas dos plazas clave del gobierno fueron cubiertas de una forma que estaba teñida por el carácter contradictorio del avance “lópezreguista” y por su intención de producir medidas fundamentales de “reencaje” del gobierno y el Estado en la sociedad. De modo que, ya no se podía tener más una política de neutralización e integración progresiva del Ejército, las relaciones de fuerzas hacían necesaria su definición política como hecho previo a la producción de las medidas contempladas en el proyecto propio del grupo presidencial. Así fue como se designó como Comandante en Jefe del Ejército al general Numa Laplane, propulsor del llamado “profesionalismo integrado”, es decir, de la definición tendencial de la fuerza en favor, no ya de la defensa del Estado y el régimen constitucional en general, sino de la línea del gobierno. Y entonces llegó el hecho culminante: el 2 de junio se nombró como ministro de Economía al ingenie-

<sup>32</sup> Para ello, debían disolverse las trabas y la falta de garantías que durante el gelbarismo y particularmente a raíz de la ley de Inversiones Extranjeras, llevaron a que no se produjeran nuevas radicaciones de capitales extranjeros y a que ninguna empresa extranjera ya instalada solicitara su incorporación al nuevo régimen de regulación de sus actividades. Lo cual, por otra parte, era expresivo de la paciente táctica que se trazaron frente al nuevo gobierno.

ro Celestino Rodrigo, miembro de la logia espiritista a la que pertenecía López Rega y el día 5, se aplicó un shock inédito al cuerpo social argentino: sin previo aviso, se resolvió devaluar el peso respecto al dólar en un 100%, aumentar el precio de la nafta en un 175% y de la electricidad en un 75% y liberalizar los precios. En el plan ministerial, estas medidas eran concebidas como un primer paso que se debía continuar, subsiguientemente a su aplicación exitosa, con diversas formas de acuerdo con las empresas transnacionales ya instaladas.<sup>33</sup> Para arribar a un tercer momento que preveía la entrada de nuevos capitales extranjeros y la obtención de significativos créditos de los centros financieros internacionales.

Pero, éstas medidas se lanzaron cuando aún no se habían firmado los acuerdos entre patrones y obreros en el marco de las Convenciones colectivas de trabajo que venían funcionando, según lo estipulado por el Acta de Compromiso, desde marzo. Su firma se había postergado a la espera de la definición de los acontecimientos en el seno del gobierno, o sea que el shock se dio en pleno estado deliberativo de obreros y empresarios, y, además, contemplaba la anulación de los acuerdos pariativos y una elevación uniforme de los salarios que no compensaba ni los porcentajes de aumento del costo de vida de los meses previos.<sup>34</sup> Por lo que las medidas quedaron atascadas rápidamente por la última movilización obrera y popular de gran envergadura del período. La inflexible posición de la Presidente en apoyo de Rodrigo fue configurando una tensa situación, en la que se evidenciaban síntomas de recuperación de la iniciativa de sectores de izquierda, en medio de una ola de protestas generalizadas que iba involucrando a segmentos importantes del aparato sindical. Y la situación desembocó en que la cúpula de la CGT debió disponer la realización de un paro general que comenzó a desarrollarse con un nivel de adhesión casi absoluto. Antes de su finalización, la Presidente debió retroceder en su posición y concedió su aprobación a los acuerdos obrero-empresarios de aumentos de sueldos, que, en algunos casos llegaban casi al 200%.

La combinación entre la movilización obrera y popular y la maniobra táctica de la dirección sindical orientada, al mismo tiempo, a reubicarse frente a la presión de las bases y producir un duro golpe a su conflictivo aliado, el "lópezrreguismo", selló finalmente la suerte del gobierno de

<sup>33</sup> El primero —y único— de los que se alcanzó a firmar, fue con las empresas automotrices, por el cual se les concedió un significativo aumento de precios y se les eximió de los depósitos que se debían realizar para la compra de insumos importados, a cambio de su compromiso de recomenzar la reinversión interna y no enviar divisas al exterior durante un determinado lapso.

<sup>34</sup> La oportunidad en que se aplicaron el shock ejemplifica uno de los componentes más huidizos para el análisis de este proceso, y que produjo frecuentemente efectos significativos: la incursión por parte del gobierno en el error táctico, en la torpeza en el manejo de las más básicas cuestiones de gobierno.

Isabel Perón. En un lapso de pocos días, por una y otra circunstancia política particular, se produjo la renuncia de López Rega. Celestino Rodrigo, Numa Laplane, etc. Hasta la Cámara de Senadores eligió su Presidente, con lo que quebraba la línea de sucesión presidencial que favorecía al Presidente de la Cámara de Diputados, que, por otra parte, también terminó renunciado a su cargo.

#### 4.c. *Las claves del derrumbe*

El fracaso de la operación de "reencaje" del gobierno en la sociedad, y el consiguiente brusco cierre de su espacio político, respondieron, entonces, a un doble desencuentro: por un lado, tal aplicación de medidas recesivas, con su descarga del costo de la crisis en el salario, resintió los lazos del gobierno con la base social con que precariamente aún contaba; pero, por otro lado, al no poder —por su propio carácter, ya analizado— quebrar la trama de alianzas internas en el peronismo, que incluía al sindicalismo como ingrediente fundamental, el grupo presidencial demostró que no podía aspirar a convertirse en el personal político de los s.e.pr. En efecto, cuando se intentó reconstruir bruscamente la tasa de ganancia mediante la liberalización de los precios, se debió recurrentemente otorgar aumentos salariales que, si bien volvían a ser vulnerados por nuevos aumentos de precios, generaban una espiral en el interior de la cual, por más buenos negocios que se pudieran hacer por parte de algunos sectores económicos, básicamente, ya era imposible el más mínimo plan de reinversión: era más seguro arbitrar entre distintas plazas y elegir el momento de comprar y vender mercancías o divisas, que arriesgar capital en inversiones productivas. Cuando el aumento de la productividad pasó a ser una de las condiciones fundamentales para el aumento del excedente, la vigencia de la ley de Contratos de Trabajo permitió un importante aumento del ausentismo laboral y, además, la CGT, ante el retroceso del salario real, fue asumiendo la reivindicación —levantada desde hacía tiempo por sectores sindicales radicalizados y combativos— de la recategorización de los asalariados. De llevarse adelante, era una reivindicación altamente irritativa, ya que las categorías contempladas en la mayoría de los convenios de trabajo estaban establecidas desde hacía algunos años, durante los cuales se habían producido cambios significativos en la productividad del trabajo y, por lo tanto, los obreros se diferenciaban inscribiéndose en categorías que ya no respondían al tipo de trabajo que realizaban, el que suponía un mayor consumo de su fuerza de trabajo. Por lo que, además, la reivindicación tenía de hecho, como blanco a las empresas más dinámicas, con mayor evolución tecnológica, es decir, las más concentradas e internacionaliza-

das.<sup>35</sup> Por otra parte requería una revisión de las tareas del obrero que suponía la puesta en consideración de sus condiciones de trabajo en general y se situaba en un plano —indelegable para la patronal— de control del proceso de trabajo. Más adelante, cuando el nuevo ministro de Economía, Bonanni, atento a los efectos del proceso recesivo en marcha, quiso crear un fondo para los desocupados, la CGT se opuso por considerar que avalaba los despidos de obreros, lo que, por otra parte, precipitó la renuncia del funcionario. En síntesis, el grupo presidencial fue trabado en su intento de convertirse objetivamente en el personal político de la racionalización del capitalismo argentino, desplazándose las fuerzas a favor de la cúpula sindical a la que, por su parte, tal victoria le significó cruzar el delgado límite entre su política de controlar pero no hacerse cargo del gobierno, a una situación en que, objetivamente, pasaban desde la CGT a vetarse a sí mismos como grupo hegemónico en el gobierno.

#### 4.d. *La desarticulación final del régimen político*

La escena política apareció, entonces, crecientemente arrasada. La crisis del gobierno y la fragmentación del Partido Justicialista arrastró al partido Radical, que había quedado en la difícil situación de no haber tenido durante el gobierno de Perón, una diferenciación neta en términos de proyecto global respecto al gobierno y, luego, haber estado sometido a una defensa del régimen constitucional que puso límites a su crítica al gobierno. Así, como el peronismo trasladaba al gobierno su lucha interna, la defensa del partido Radical de las instituciones, disolvía, por momentos, su crítica al gobierno: no estaba claramente diferenciado de la escena política gubernamental, pero, al mismo tiempo, no contaba con resortes de decisión estatales como para intentar revertir la situación. Amén de ser, “en tanto tal”, una organización eminentemente electoral y de base en sectores medios, incapaces en ese contexto de generar una movilización política significativa.

Hacia la izquierda del espectro, si bien durante el “rodrigazo” se habían producido avances de las organizaciones más radicalizadas y del reformismo obrero, no alcanzaban para sobrenadar de manera sostenida la posición defensiva en que se encontraban. Y, hacia la derecha, la

<sup>35</sup> “...entre 1960, cuando ya se habían iniciado gran parte de las nuevas actividades, y 1973, las tasas de productividad prácticamente son las ya mencionadas, 7, 33 y 3, 98 mientras que la variación del salario real es de 2,56 y 1,99 para empresas extranjeras y total industrial respectivamente. La implicancia de esto es que el aumento de salarios reales apenas alcanza a representar el 34 y 51% de los respectivos aumentos de productividad y es interesante observar que la transferencia de los aumentos es relativamente *menor* en las empresas extranjeras que en el total industrial”, Juan V. Sourrouille, *op. cit.*, p. 39.

franca contraofensiva de los s.e.pr. no pasaba por llenar la escena política representativa generando una fuerza que le disputara el régimen a los alicaídos partidos. El encaminarse hacia otras formas de relación con el Estado, más orgánicas a sus intereses, les dio una gran capacidad de maniobra para canalizar con gran amplitud, sin necesidad de introducir clivajes políticos explícitos, la protesta patronal. De modo que se produjeron paros de productores agropecuarios, la formación de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales (APEGE),<sup>36</sup> con lo que retomaron en toda la línea la iniciativa corporativa y, hacia el final del período produjeron el primer paso general de empresarios de la historia del país, y con un éxito notable. Desde el punto de vista institucional, el Parlamento, sometido a las características de la lucha en el gobierno y en el Partido Justicialista —dada la composición mayoritariamente peronista de las Cámaras— quedó relegado como instancia de decisión y anulado en su función técnico-legislativa, por lo que no podía convertirse en el polo interno al régimen político desde el cual revertir su crisis global.

Ante la discrepancia entre el régimen político y el poder real, el dinamismo económico presentaba un grado de descontrol notable, sus propias tendencias recesivas internas generaron una situación desbordantemente crítica: en 1975, la inflación llegó al 350%, el balance de pagos dio un saldo negativo de 1095 millones de dólares, el producto bruto fue un 2% inferior al año anterior y la inversión bruta interna un 16%. El país se hallaba al borde de la cesación de pagos internacionales.

Las Fuerzas Armadas se habían ubicado en una especie de “profesionalismo táctico”, desde el que evitaban intervenir en la escena política hasta llegada una situación de desgaste total del régimen. Sin embargo, fueron, crecientemente, el eje de reordenamiento del cuadro político. A tal punto, que el, digamos, segundo grupo presidencial —más conocido por el “entorno”— llegó a proponerle un esquema político de relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas similar al uruguayo y que suponía la “bordaberrización” de Isabel.

Agónicamente, el gobierno ensayó, sin suerte, medidas económicas y represivas que suponían estuviesen contenidas en el plan a llevar adelante por el gobierno del inminente golpe militar.

Pero, las Fuerzas Armadas, por un lado, los s.e.pr. por el suyo, rechazaban las ofertas del gobierno: las relaciones de fuerzas estaban totalmente definidas.

<sup>36</sup> El núcleo organizador de la APEGE estaba constituido por la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Comercial Argentina, etcétera. El sector empresarial más concentrado, y que a través de la UIA se había fusionado con la CGE en la CINA, operaba desde dentro de esta entidad, aprovechando el derrumbe interno de la dirección gelbarista, en una misma dirección objetiva que la APEGE.

Y mientras los sectores hegemónicos en el gobierno abandonaban totalmente el proyecto populista originario, la clase obrera quedaba en una singular posición: económica, política e ideológicamente estaba colocada a la defensiva, pero no como producto de un enfrentamiento directo con los sectores dominantes y una subsiguiente derrota, sino a partir de los efectos de la política del gobierno en el que se sintió representada. Ello supuso que cuando se produjo el derrumbe final del gobierno ya se había retirado de la escena: bien miradas las cosas, su última intervención, en tanto fuerza social, había sido exitosa, el "rodrigazo".

En este cuadro global, en marzo de 1976, el camino de acceso al gobierno por parte del único poder significativo que quedaba en pie, las Fuerzas Armadas, se hallaba totalmente abierto.